

Comentario

Francisco Valdés Ugalde

4

5



Este comentario se divide en dos partes: 1) observaciones a las ponencias presentadas y 2) apuntes sobre los cambios del modelo político y social que están en pleno curso en el país.

I

Lo primero que me gustaría señalar es que no soy un especialista en elecciones y que, por lo tanto, no voy a referirme a cuestiones de método y enfoque en detalle. Como puede verse, en las exposiciones que hemos escuchado se nos presentan varias relaciones entre los acontecimientos electorales y partida-

rios de los últimos años a partir de una idea central: el aumento de la competencia electoral de los partidos políticos de oposición respecto del PRI. La revisión de los datos de las elecciones federales y estatales celebradas entre 1988 y principios de 1990 que nos presenta el trabajo de Leonardo Valdés, nos lleva a la conclusión de que el aumento de la competitividad de la oposición no es un fenómeno pasajero, sino una tendencia destinada a permanecer y a desarrollarse, aunque con una distribución regional heterogénea tanto por los niveles de participación que muestra como por las correlaciones entre partidos que el voto ciudadano ha impreso a las instituciones de gobierno en las diferentes



elecciones federales, estatales y municipales.

En términos nacionales, podemos ver un PRI debilitado que ha entrado de lleno, desde la campaña electoral y renovadamente luego de julio de 1988, en un proceso de adaptación a las nuevas condiciones buscando cómo estabilizar su declinación mediante la renovación de sus bases de apoyo y creando o ajustando los mecanismos legales y extralegales que le permitan mantener cómodamente el poder. Por otro lado, un PAN fortalecido al grado de empezar a participar en lo que ese mismo partido ha llamado tareas de cogobierno, y una izquierda mejor organizada para la lucha electoral pero aún muy fragmentada y diluida en su propuesta de gobierno.

Quisiera señalar los que me parecen los aportes más interesantes de la ponencia, para luego formular algunas dudas y problemas que remiten a los

asuntos involucrados en el cambio de modelo político.

El primer acierto del trabajo es el de presentar una descripción que reúne los elementos esenciales del proceso electoral (y muchos del proceso político más amplio) de 1988 a la fecha. El segundo gran acierto consiste en lo que ya mencioné referente a mostrar cómo el aumento en la competencia electoral permite suponer que lo que ocurrió en las elecciones de julio de 1988 no es un acontecimiento aislado, sino una tendencia que habrá de pronunciarse en el futuro. El tercer punto que llama la atención es el de la incertidumbre respecto a la tendencia del abstencionismo, pues la conjunción de una creciente y ya muy alta competitividad electoral refleja la canalización de un descontento que difícilmente puede reducirse a la porción votante de la ciudadanía. Más bien habría que pensar en la existencia de un des-

contenido político y social que no se canaliza actualmente por la vía electoral y que podría dar lugar a movilizaciones de otro tipo, ya sea en contra o en apoyo del gobierno y del PRI. Ésta sería una primera pregunta: ¿cómo interpretar el abstencionismo?

Pero si pensamos con un poco de detenimiento nos encontramos con la necesidad de hacer la misma pregunta respecto de los que sí votaron: ¿a qué se debe que muchos electores presionen con su voto en favor de la oposición contribuyendo así —no sabemos si intencionalmente o no— a transformar la configuración de nuestro sistema político? Creo que la importancia de esta pregunta no necesita ser exagerada; basta observar las recientes elecciones en Nicaragua y, más ampliamente, lo que ocurre en Europa central, para entender la dimensión del problema. En pocas palabras, formularía así la pregunta: ¿de qué electorado estamos hablando cuando analizamos con sorpresa la evolución reciente de las elecciones en México? Dejando en libertad a los expositores de contestarla como gusten o aun de no contestarla, con ella nos adentramos en el terreno de la cultura política nacional que es hasta hoy, aunque parezca paradójico afirmarlo, un terreno poco conocido del cual forman parte tanto los que votan como los que no lo hacen pues, a fin de cuentas, todos son vecinos.

II

Quisiera ahora plantear algunos problemas relacionados con lo electoral y partidario pero que no se agotan en ello. La intención es destacar varios procesos sociales y políticos indisolublemente asociados al comportamiento electoral y que me parece juegan un papel cru-

cial en el cambio político que experimenta el país.

Muchos autores han señalado que la crisis económica unida a las transformaciones demográficas y culturales del país ha dado lugar a un proceso de cambio de las instituciones políticas. Algunos han incluso afirmado que a la organización de un nuevo esquema de relaciones económicas entre los distintos sectores y clases sociales, entre la sociedad y el gobierno, y entre el país y el orden internacional, corresponde la organización de un esquema de relaciones políticas diferente al que ha prevalecido hasta hoy.

Lo electoral es la instancia en la cual se concentran, en muy alta medida, tanto las presiones del electorado y los partidos políticos por efectuar cambios de gobierno o en el gobierno, como las estrategias de cambio y resistencia generadas desde el interior del régimen. Para apoyar esta idea basta observar lo que ocurre en las elecciones desde los años 70 y, particularmente, desde 1988 y los efectos que éstas han tenido en la reconfiguración de los alineamientos partidarios.

Sin embargo, estamos en presencia de hechos que nos remiten, por una parte, a lo que ocurre en las instituciones reales y formales que norman o determinan los procesos electorales y, por la otra, a las transformaciones ocurridas en la cultura y los proyectos de los agentes sociales que influyen en el electorado. En ambos campos está desarrollándose una verdadera lucha por la conservación o el replanteamiento del contrato o pacto social, si se acepta la existencia de un conjunto de relaciones sociales que merezcan dicho nombre.

Las reformas de la economía y del Estado emprendidas por los dos últimos gobiernos, son reformas cuya profundi-

dad las distingue del reformismo ordinario que ha caracterizado al sistema político. Estas reformas no tratan de hacer ajustes dentro de un pacto social, sino de cambiar de pacto. Ya se ha dicho, pero quizás no todavía con la fuerza que lo ameritaría, que en 1982 se inició lo que podríamos llamar la pos-revolución, la que, en el mejor de los casos, implica una revisión, cuando no un simple adiós a la revolución mexicana.

En este proceso quizás nada esté más en juego que el carácter tutelar del autoritarismo mexicano surgido de la revolución. La legitimidad del Estado pos-revolucionario frente a las clases populares ha descansado en el compromiso constitucional del Estado de mediar entre desiguales en favor de los más débiles, recogiendo una demanda social de protección y resistencia respecto a las formas seculares de explotación y dominación autoritaria que, al final de cuentas, ha servido más para reproducir a estas últimas que para reducir la desigualdad. Para demostrar esto bastan los datos emitidos por el propio gobierno a través del Programa Nacional de Solidaridad.

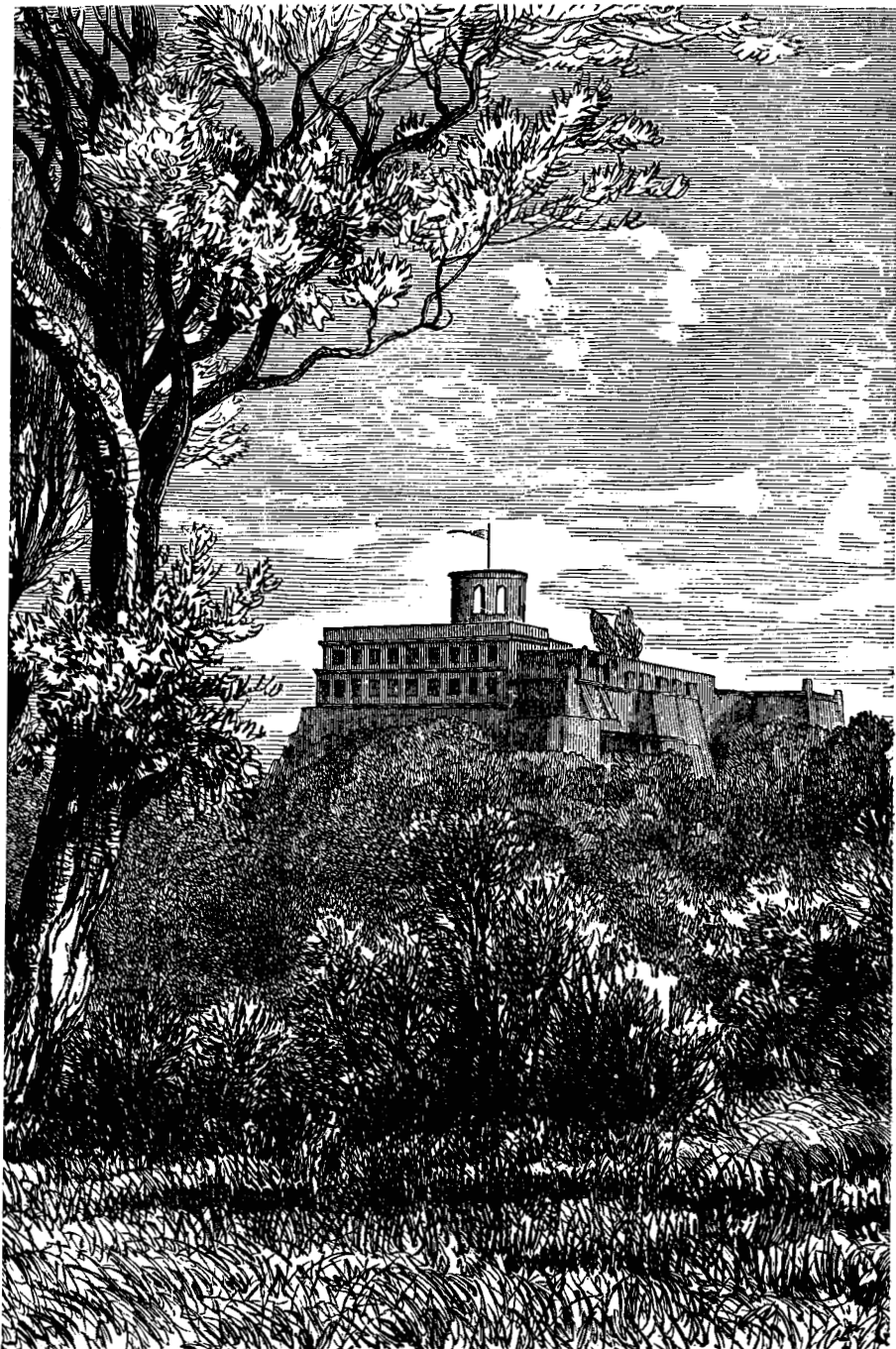
Hoy ese compromiso y sus mediaciones correspondientes están cambiando sustancialmente, al grado de hacer difícil pensar que el futuro del pacto social sea una prolongación del anterior. Hoy se enfatiza la igualdad entre libres concurrentes y se desplaza al gobierno de una función de mediación entre clases sociales a otra de paliar los resultados inevitables de la "modernización" económica. Hay aspectos del pacto posrevolucionario que están en plena crisis o que virtualmente ya no existen, y son todos aquellos que dificultan la inserción del país en un contexto internacional que se presenta extremada-

mente fluido y cambiante; pueden citarse como ejemplo las normas que rigen las relaciones entre el capital y el trabajo, el tamaño y las funciones del Estado, o que obstaculizan el desarrollo de formas modernas de producción, las normas (o prácticas) que regulan la propiedad agraria y el control nacional sobre los recursos naturales. En este sentido el debate nacional es un debate *constitucional* de tal envergadura que conduce a cambiar el pacto social y su expresión escrita: la Constitución política.

Sin comprometer hipótesis sobre el derrotero que habrá de seguir la creación de una nueva institucionalidad política, todos los signos apuntan a suponer que la actual tendrá que sufrir cambios aún más profundos de los que ya ha sufrido para permitir el paso de un esquema agotado y cada vez más difícil de reproducir sin recurrir a la represión, a uno nuevo que sea plural e igualitario.

Aunque suelo llevar siempre conmigo como referencia íntima la máxima de un amigo que dice que el mundo se divide entre quienes son pesimistas y quienes están mal informados, no puedo menos que reconocer que la actual vitalidad electoral del país refleja una fuerte necesidad de democratización y participación política; pero también que esta necesidad se produce en el marco de un replanteamiento de la institucionalidad política más amplia y del pacto o los pactos sociales que hay que reconstruir y que tienen que ver con la convivencia social en aspectos cruciales como la distribución de la riqueza social y la vigencia real de un Estado de derecho, legítimo por el sólo hecho de serlo.

Los partidos políticos tendrían que reconocer abiertamente la complejidad de este problema, y no veladamente como



4

9



dan la impresión de hacerlo ahora, presentándose en la escena electoral *como si* solamente se tratara de avanzar sobre un terreno previa y consensualmente definido y no de una situación en la que la tendencia predominante es la de la redefinición de todas las reglas del juego económico, político, social y cultural.

El neoliberalismo ya está aquí —aunque en Inglaterra parece que se va—, y por lo visto llegó para quedarse aunque no podemos estar seguros de que lo conseguirá. Pero esto depende de su habilidad para desprenderse del viejo pacto social heredado de la posrevolución y para tejer un acuerdo con el Partido Acción Nacional y los principales poderes económicos con el objeto de hacer

irreversible la instauración del modelo económico (pagando el costo de *cierta* alternancia en el poder).

El que las cosas adopten un cariz diferente dependerá de las capacidades y posibilidades de la izquierda para tomar la iniciativa y formular y difundir coherentemente un programa económico y político *posneoliberal* (con alcances de pacto histórico) y no *preneoliberal* como parece ser el caso.

Pero volviendo al principio, todo esto encierra, para los partidos políticos, para la ciencia política, para el país, conocer al electorado, entender su forma de participación o abstención y los contenidos de interés, valor y proyecto asociados al proceso electoral.

